



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-011-2017-00171-01
Demandante:	José Helgar López Guzmán
Demandado:	Universidad de Antioquia- Colpensiones
Asunto:	Consulta Sentencia
Procedencia	Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, VIGENCIA DE LEY 4 DE 1976

**Medellín, marzo doce (12) de dos mil veintiuno (2021)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada ponente, procede, de conformidad con el artículo 15 del decreto 806 de 2020, a decidir el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la sentencia proferida el 05 de marzo de 2020, en el proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSE HELGAR LOPEZ GUZMAN en contra de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. Radicado 05001-31-05-011-2017-0171-01.

**1.- ANTECEDENTES**

### 1.1.- DEMANDA

El señor JOSE HELGAR LOPEZ GUZMAN promovió demanda ordinaria laboral en contra de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, pretendiendo se declare que tiene derecho al reajuste anual de la pensión convencional de jubilación, que le fue reconocida por la Universidad de Antioquia, en un porcentaje del 15% de la respectiva mesada pensional, a partir del año 2000, que en consecuencia se condene a la Universidad de Antioquia a pagar la diferencia que resulte entre el valor pagado y el valor reajustado, en forma indexada.

Los fundamentos fácticos en que se apoyan las pretensiones, lo son, en síntesis, que el señor JOSE HELGAR LOPEZ GUZMAN, laboró, en calidad de trabajador oficial, al servicio de la Universidad de Antioquia, entre el 01 de enero de 1970 y el 14 de octubre de 1987, fecha en la cual entró a disfrutar de la pensión de jubilación de naturaleza convencional, que le fue reconocida mediante resolución No. 285 del 1 de diciembre de 1987, con fundamento en el artículo 14 de la convención colectiva de trabajo 1976-1977, suscrita el 23 de marzo de 1976.

Expone que el artículo 15 de la citada convención colectiva establece: *“A partir de la vigencia de la presente convención, la universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, el subsidio familiar, se beneficiaran de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención, las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares, y para estudio y becas. Igualmente, la universidad dará cumplimiento a la ley 4 de enero 21 de 1976 para el personal de pensionados por invalidez y jubilación.”*

Aduce, a su vez, que la ley 4 de 1976, consagró en el artículo 1, el derecho al reajuste anual de las pensiones de jubilación e invalidez, tanto de naturaleza

pública como privada y en forma expresa a través del parágrafo tercero, fijó el porcentaje mínimo del aumento que tendrían las pensiones, que en ningún caso será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de 5 veces el salario mensual mínimo legal más alto, que para el momento del reconocimiento de la pensión al accionante, se encontraba vigente la ley 4 de 1976 y cláusula 15 de la Convención, en virtud de la cual se adoptó la ley 4 de 1976, como norma convencional, la cual no ha sido modificada, anulada o sustituida por acuerdos convencionales; que la Universidad ha dado cumplimiento a la cláusula décimo quinta de la convención, salvo en relación con el parágrafo tercero del artículo 1 de la ley 4 de 1976 y que a partir del 2000, la pensión del demandante ha sido incrementada en el IPC anual, en porcentajes inferiores al 15% e incluso inferiores al salario mínimo legal, por lo que su pensión registra un déficit en su cuantía, precisando que la misma no ha superado cinco (5) salarios mínimo legales.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

### ***La universidad de Antioquia***

La universidad de Antioquia, una vez notificada del auto admisorio del libelo incoativo de la demanda, se pronunció oponiéndose a las pretensiones y aceptando como hechos ciertos el reconocimiento de la prestación, conforme a la norma convencional, el incremento de la misma en los porcentajes del IPC anual, precisando que entre los años 1976 y 2000, tal porcentaje estuvo por encima del 15 %, argumentando que la ley 6 de 1976, fue derogada por el artículo 1 de la ley 71 de 1988, y posteriormente por el artículo 14 de la ley 100 de 1993 y por ende no puede ser aplicada, indicando que no es cierto que la pensión del accionante haya venido siendo pagada en forma deficitaria ni que el mismo tenga derecho a reajuste alguno.

Propone las excepciones de adecuada interpretación de la convención por parte de la universidad; inexistencia de la obligación de incremento del 15% a cargo de la universidad; buena fe de la Universidad y prescripción.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia proferida en audiencia pública llevada a cabo el seis (6) de marzo de 2020, ABSOLVIO a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, de todas las pretensiones incoadas en su contra por el señor JOSE HELGAR LOPEZ GUZMAN y condenó en costas al demandante.

Decisión respecto a la cual no se interpuso el recurso de apelación.

### **1.5. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal se pronunció la señora apoderada de la Universidad de Antioquia, solicitando se confirme la decisión de instancia, expresando que el artículo 15 de la convención colectiva 1976-1977, no introdujo el contenido de la Ley 4 de 1976, simplemente hizo una referencia normativa, y siendo derogada la norma, tendría que correr la misma suerte la disposición que remitía a ella. Afirma que la Universidad ha venido reajustando las pensiones a su cargo, con fundamento en las normas vigentes, en su momento, el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 y luego con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y que la jurisprudencia que invoca en su favor la parte accionante, no encuentra aplicación en este evento, porque en el caso de la

Electrificadora del Atlántico, la Ley 4 de 1976 se aplicaría sin consideración a su vigencia y así quedó consagrado en el texto convencional.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1 PROCEDENCIA DE LA CONSULTA**

Procede la consulta, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*Las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente consultadas con el respectivo Tribunal si no fueren apeladas.*”

### **2.2.- HECHOS ACREDITADOS Y NO DISCUTIDOS**

Se encuentra que no son objeto de controversia los siguientes supuestos fácticos, los cuales fueron aceptados desde la contestación de la demanda, y fijados en el litigio.

- Que al señor JOSE HELGAR LOPEZ GUZMAN le fue reconocida pensión de jubilación de orden convencional por parte de la Universidad de Antioquia, mediante Resolución No. 285 del 01 de diciembre de 1987, en cuantía de 50.570.68. (folios 28 a 30).
- Que la cláusula 15 de la convención colectiva 1976-1977, suscrita entre el sindicato de trabajadores oficiales de la Universidad de Antioquia y esta

Institución oficial, no ha sido modificada o sustituida en convenios o laudos arbitrales posteriores.

- Que al accionante se le ha reajustado la pensión, con fundamento en el IPC al consumidor, que a partir del año 2000, correspondió a porcentajes inferiores al 15%.

### **2.3. PROBLEMAS JURIDICOS**

Deberá la Sala determinar:

1. ¿Si el párrafo tercero del artículo 1 de la ley 4 de 1976, se encuentra incorporado como fuente de derecho autónoma, a la Convención Colectiva de trabajo 1976-1977, suscrita entre la Universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la institución?
  
2. ¿Si el demandante tiene derecho al reajuste de su pensión convencional de jubilación con el porcentaje del 15 % anual, establecido en el artículo 1 de la Ley 4ª de 1976, conforme a la cláusula 15 de la Convención Colectiva de trabajo 1976-1977, suscrita entre la Universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la entidad?

### **2.4. TESIS**

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual i) la ley 4 de 1976 no fue incorporada como fuente normativa autónoma a la Convención Colectiva de Trabajo 1976-1777 suscrita por la Universidad de Antioquia y su sindicato de trabajadores; ii) El artículo 1 de la ley Ley 4 de

1976 fue sustituido por el artículo 1 de la ley 71 de 1988 y derogado por el artículo 14 la ley 100 de 1993; en consecuencia, la sentencia debe ser **CONFIRMADA**, como se pasa a explicar.

## **2.5. PREMISAS NORMATIVAS**

### **La derogatoria de la ley 4ª de 1976,**

La ley 4ª de 1976, consagró el reajuste automático de oficio y anual de las pensiones del sector público y privado, estableciendo como regla general que las pensiones se reajustaran de oficio, una vez al año, con base en el aumento del salario mínimo legal, promediando la diferencia con el salario mínimo más alto, de acuerdo con la fórmula que la ley misma establece.

Señaló, además, en el párrafo tercero, que los anteriores reajustes “no podrán ser inferiores al 15% de la mesada respectiva para las pensiones equivalentes hasta 5 veces el salario mínimo legal más alto.”

Posteriormente, el legislador expidió la ley 71 de 1988, que en su artículo 1, estableció que las pensiones de que trata el artículo 1o. de la Ley 4a. de 1976, serán reajustadas de oficio, cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual, sin promedios de diferencia entre el salario mínimo más alto; ese reajuste tenía vigencia simultánea al que se fija para el salario mínimo, previendo que la disposición es aplicable para las pensiones causadas a partir del 01 de enero de 1989 y eliminando el límite cuantitativo en el reajuste al 15%, que regulaba el párrafo tercero del artículo 1 de la ley 4 de 1976.

En relación con las pensiones del sector público nacional se expidió, más adelante, el decreto 2108 de 1992, que reglamenta el artículo 116 del Estatuto Tributario, prescribiendo que las pensiones de jubilación del sector público nacional reconocidas con anterioridad al 1o. de enero de 1989, que presentaren diferencias con los aumentos de salario mínimo, se reajustaran por una única vez, a partir del 1o. de enero de 1993, 1994 y 1995, así: las pensiones reconocidas en 1981 y en fechas anteriores, se reajustaron en un 28%. Su pago se dividió en tres partes: el 12% a pagarse en 1993; el 12% en 1994 y el 4% restante en 1995., para las pensiones reconocidas de 1982 a 1988, se decretó un reajuste del 14% pagadero en dos partes: un 7% en 1993 y el otro 7% en 1994.

Finalmente, se expidió la Ley 100 de 1993, que en su artículo 14, estableció como nueva regla pensional, que, a partir de su vigencia, todas las pensiones se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero, según la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, para el año inmediatamente anterior; se dispuso que, no obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.

De ahí que, desde la expedición de la ley 71 de 1988, se modifica el reajuste pensional, para aquellas pensiones reconocidas a partir del 01 de enero de 1989, hito temporal a partir del cual la disposición contenida en el parágrafo tercero del artículo 1 de la ley 4 de 1976, debe entenderse sustituida por la norma posterior que reguló íntegramente la materia y para todas las pensiones a partir del 01 de abril de 1994.

No hay duda, entonces, que la ley 4ª de 1976, se encuentra derogada a partir del 01 de enero de 1989 y en este mismo sentido, lo definió la Corte Constitucional en la sentencia C110 de 2006:



*“A partir del 1° de enero de 1989 y hasta la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, todas las pensiones que fueron reconocidas en el país, tanto en el sector público como en el privado, se reajustaron anualmente conforme a la fórmula prevista en la Ley 71 de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en que se incrementó por el Gobierno el salario mínimo legal mensual. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 ibídem, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los pensionados con anterioridad al 1° de enero de 1994.*

*De lo anterior se concluye que, en la actualidad, a los pensionados bajo la vigencia de la ley 4ª de 1976 no se les reajusta la pensión con base en dicha ley, como equivocadamente lo sostiene el demandante, sino que, al igual que todos los demás pensionados, el reajuste se lleva a cabo siguiendo la fórmula prevista en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes.*

*Por eso, en la medida que el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976 se encuentra derogado desde el año de 1988 y no está produciendo efectos jurídicos actuales, la Corte se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo por falta de competencia funcional, motivada en una clara sustracción de materia o carencia actual de objeto.”*

## 2.5. CASO CONCRETO

### **El alcance de la remisión a la ley 4ª de 1976 contenida en la cláusula 15 de la convención colectiva de trabajo**

La referida cláusula Decimoquinta de la Convención 1976 y 1977, suscrita por la Universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la institución de Educación Superior, es del siguiente tenor:

*“A partir de la vigencia de la presente convención, la universidad reconocerá a los trabajadores pensionados por invalidez y jubilación, el subsidio familiar, se beneficiarán de la distribución de los remanentes de que trata la convención de 1975 en el capítulo quinto; el servicio médico familiar de que trata el capítulo quinto de esta convención, las primas de junio y navidad; los auxilios por maternidad, entierro, útiles escolares, y para estudio becas.*

*Igualmente, la universidad dará cumplimiento a la ley 4 de enero 21 de 1976 para las personas de pensionados por invalidez y jubilación.*” (Subraya de la Sala)

Como la norma convencional, remite a una disposición derogada, debe la Sala determinar si la ley 4 de 1976, está incorporada como fuente formal autónoma a la Convención Colectiva 1976-1977 en estudio.

Preliminarmente se indica que esa incorporación normativa, es plenamente posible y válida en el marco de la negociación colectiva, sobre el tema, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 40551 del 25 de octubre de 2011, explicó:

*“No hay regla de derecho que impida que el empleador y el sindicato acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo, el contenido de una norma legal que conservara vigencia como norma convencional así aquella esta sea posteriormente derogada, pues desde el pacto entra a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención en los términos del artículo 467 del código sustantivo de trabajo.”*

En el tópico relativo a la interpretación de la cláusula convencional, la Corte suprema de Justicia, ha señalado que las partes son, en principio, los intérpretes autorizados, sin que el Juez pueda apartarse del sentido gramatical y explícito de la norma interna, para dar un alcance distinto a la norma convencional:

*“... No puede olvidarse que las convenciones colectivas no obstante su naturaleza normativa son en el recurso extraordinario una prueba más y por lo mismo los llamados a fijar su sentido, cuando las partes contratantes tienen discrepancias al respecto, son en primer lugar los jueces de instancia, quienes solamente están obligados a señalar las razones por las cuales otorgaron determinado entendimiento a la cláusula respectiva... cuando se advierta que el alcance dado por el juzgador de instancia pugna radicalmente con el contenido gramatical de la cláusula con la intención explícita de las partes al redactarla, puede entrar la Corte a infirmar dicha*

*interpretación, por cuanto es indudable que en esta hipótesis si se está en presencia de un error protuberante de hecho,,” (Sentencia radicado 23302 del 22 de noviembre de 2004)*

La discusión de las partes frente al alcance de la cláusula 15 de la Convención Colectiva de trabajo 1976-1977, que se plantea en este proceso, evidencia que las partes no concuerdan en interpretación de la cláusula convencional. De ahí que el Juez para su aplicación, debe atender, en primer término, a la literalidad de la norma convencional y no le es dable apartarse de la regla que las partes consignaron en ella.

*“no puede el juez en estas materias apartarse de lo literal de las palabras para imponerle a las partes obligaciones que van más allá del texto del convenio normativo, salvo que claramente aparezca que la intención de quienes celebraron la convención colectiva fue diferente.” (sentencia 7243 del 07 de abril de 1995)*

Si se consulta la literalidad de la norma, es claro que en el inciso final de la misma, las partes acordaron que la universidad **“dará aplicación”** a la ley 4 del enero de 21 de 1976, sin consagrar el derecho específico al reajuste bajo la metodología establecida en artículo 1 de la ley 4 de 1976 ni al límite del 15% consagrado en el párrafo tercero del citado artículo, en este sentido, dado los principios de vigencia inmediata y obligatoriedad de la ley, la norma convencional, en su redacción, nada parece agregar.

Pese a lo anterior, no existe constancia en el expediente que la intención de las partes al redactar la cláusula, fuera otra, pues considerar que los negociadores anticiparan la sustitución de norma para 1988 y pretendieran la aplicación de la norma con posterioridad a su vigencia, no resulta una hipótesis sólida, siendo importante tener en cuenta el contexto histórico, pues la convención

se suscribe el 23 de noviembre de 1976, cuando aún no se había dado aplicación al reajuste señalado en la citada ley, que fue expedida el 21 de enero de 1976, incremento que debía ser aplicado al 01 de enero de 1977, por lo que, en el sentido natural y obvio de las palabras utilizadas por las partes en el contrato colectivo, su voluntad no va más allá de garantizar, que la Universidad diera cumplimiento a la norma.

Si bien en el sublite, la pensión convencional le fue reconocida al accionante en vigencia de la ley 4 de 1976, teniendo en cuenta que la prestación fue otorgada mediante la resolución 285 del 1º de diciembre de 1987, solo puede serle aplicada hasta el 01 de enero de 1989, dado que la Convención no incorporó la ley 4ª de 1996, como fuente normativa autónoma, pues la cláusula no reproduce o anexa los derechos legales al texto convencional, además de que las partes no regularon la permanencia de los beneficios como derecho autónomo más allá de la vigencia de la ley.

Notese además que el paragrafo 3 del artículo 1 de la ley 4 de 1976, no se refiere al reajuste del IPC, que estableció el artículo 14 de la ley 100 de 1993 y que es el que toma el promotor del proceso como parámetro para determinar que su incremento ha sido inferior al 15 %, sino una fórmula específica de reajuste que correspondía a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo legal mensual más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje de incremento, así:

*ARTICULO PRIMERO. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente, parcial se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:*

*Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje*

*que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.*

*Cuando transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más alto se procederá así: Se hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Dicho incremento se hallará por la diferencia obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados de la población afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.*

*Establecido el incremento, se procederá a reajustar todas las pensiones conforme a lo previsto en el inciso 2o. de este artículo*

**PARAGRAFO 3o.** *En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto. (subraya de la Sala)*

Sobre la especificidad de la fórmula de reajuste de las pensiones contempladas en el nombrado artículo 1 de la ley 4 de 1976, el Consejo de Estado, precisó:

*“De acuerdo con lo anterior, el reajuste se hace con la mitad de la diferencia, en términos absolutos y porcentuales, del incremento en el salario mínimo nuevo y el anterior. Ahora bien, respecto de cuál salario debe considerarse el “antiguo salario mínimo” y cuál debe considerarse el “nuevo salario mínimo”, conviene mencionar que esta corporación en sentencia del 2 de diciembre de 1992 dictada dentro del proceso 2971, con ponencia del Dr. Diego Younes Moreno manifestó lo siguiente:*

*“Es evidente que cuando la ley ordena reajustes anuales a partir del 1º de enero las alternativas que para dichos reajustes presentan los incisos 2º y 3º del artículo 1º de la Ley 4 de 1976 se refieren a la anualidad inmediatamente anterior, pues no es concebible que dichas alternativas operen en el mismo año en que deben reajustarse (sic) las pensiones a partir del 1º de enero, pues ello conduciría a que los incrementos pensionales solo podrían determinarse el 31 de diciembre del respectivo año, fecha en que se sabría si han ocurrido aumentos en el salario mínimo legal más elevado o sí por el contrario, habría que aplicarse la segunda alternativa, o sea la de determinar el valor del incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Para este evento el inciso 3º establece claramente que el incremento en el nivel general de salarios debe medirse entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y es incuestionable que para la primera alternativa deben también incluirse todos los aumentos del salario mínimo legal más alto que hubieran ocurrido desde el 1º de enero al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, lo que se obtiene, como lo hizo la oficina jurídica en la circular acusada, tomando los*

*salarios mínimos vigentes en 31 de diciembre de uno y otro año anteriores al 1° de enero en que debe operar el reajuste pensional”.*

*En iguales términos se pronunció esta Sala en sentencia del 27 de Julio de 1992, expediente 4684, con ponencia del Dr. Joaquín Barreto Ruíz en uno de cuyos apartes señaló:*

*“El tema debatido no es nuevo porque evidentemente ésta sección en la sentencia mencionada anteriormente y en otros pronunciamientos posteriores ha concluido que el aumento pensional correspondiente a 1978, se obtiene comparando el salario mínimo legal mensual más alto vigente a 31 de diciembre de 1976, como el salario antiguo, y el mismo salario vigente a 31 de diciembre de 1977 como nuevo, o sea \$1.560 y \$2.340, que determinan un aumento del 25% más \$390; y no comparando el salario vigente el 1° de enero de 1977, que determinaría un aumento de 16,10% más \$285”.*

(27001233300020130006601. N° interno: 2051-2014 del 13 de julio de 2017)

El reajuste pretendido por el señor José Helgar López Guzmán, no es respecto a la fórmula prevista en el artículo 1 de la ley 4 de 1976, que es el que regula el paragrafo, sino el del artículo 14 de la ley 100 de 1993, dado que los incrementos anuales aplicados a las pensiones públicas y privadas durante la vigencia de la ley 4 de 1976, esto, del 01 de enero de 1976 al 01 de enero de 1989, siempre superaron el porcentaje del 15 % previsto en la norma, al igual que el IPC, aplicado a partir de la vigencia de la ley 100 de 1993, lo cual se mantuvo hasta el año 2000, año en el cual desciende el porcentaje.

En otro orden de ideas, no desconoce la Sala que existe un precedente jurisprudencial amplió de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en torno a otras cláusulas convenciones que han hecho referencia a la Ley 4 de 1976, contenidas en las convenciones suscritas por ELECTROCARIBE y ELECTROGUAJIRA, en las cuales se pacta el reconocimiento de los derechos contenidos en la referida Ley y a partir de las cuales la alta Corporación concluye que la misma está incorporada al texto convencional, aun encontrándose derogada y por lo tanto es aplicable como fuente de derecho autónoma a los beneficiarios de la convención. Véase, entre otras sentencias SL43851 de 2012, SL 642 de 2013, SL 1846 de 2014, SL 2105 del

2015, SL1917 de 2019, SL 1954 DE 2020, SL 2172 de 2020, SL 2258 de 2020, SL 1907 de 2020, SL1507 de 2020.

Por ejemplo, en la sentencia SL2172 del 09 de junio de 2020, se recordó:

*“Ahora bien, lo argumentado por la sociedad demandada no es de recibo para esta Sala, como quiera que, conforme lo coligió el Ad quem, es dable entender que dentro de los derechos consagrados en la Ley 4ª de 1976, se encuentra, precisamente el del incremento concedido en las instancias, y no hay regla de derecho que impida que empleador y sindicato, acuerden reproducir en el convenio colectivo de trabajo el contenido de una norma legal, que conservará vigencia como norma extralegal, así aquella sea posteriormente derogada, puesto que desde que se pactó lo mismo, entró a formar parte de los contratos de trabajo de cada uno de las personas que se benefician de la convención, en los términos del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. (Ver sentencia CSJ SL, 25 oct. 2011, rad. 40551, reiterada en la CSJ SL, 6 mar. 2012, rad 43851).*

*Así las cosas, el Tribunal no incurrió en un yerro fáctico ostensible, cuando apreció la disposición convencional de marras, e infirió que cuando la convención alude a los derechos contemplados en la Ley 4ª de 1976, se está refiriendo, al reajuste pensional que mediante esta acción judicial se reclama, sin consideración a la vigencia de dicha norma, pues aun cuando aquella sea derogada o subrogada, y quede por fuera del ámbito jurídico, se sigue aplicando por voluntad de las partes vía convencional.*

*Siendo entonces una situación similar, respecto de la cual ya existe una posición jurisprudencial suficientemente decantada, deberá concluirse que los cargos son infundados y por lo tanto no prosperan.*

No obstante, para esta Sala de decisión, el precedente no es aplicable en este caso, por dos razones; en primer lugar, porque el contenido de las cláusulas, es sustancialmente distinto, como se observa:

-Electrificadora del Atlántico S.A. E.S.P. sustituida por  
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

ARTICULO 2. *“Todos los trabajadores que se encuentren pensionados por la ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. o que se pensionen en el futuro, se les seguirán reconociendo todos los derechos contemplados en la ley 4ª de 1976, sin consideración de su vigencia”.*  
(subraya extratexto)

-ELECTOQUAJIRA- SUSTITUIDA POR ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

*“ARTICULO 90. AUXILIOS Y SERVICIOS PARA LOS JUBILADOS. La empresa Electroguajira S.A. reconocerá a sus pensionados y jubilados los beneficios a que tienen derecho de acuerdo con la Ley cuarta de 1976. También tendrá derecho al servicio de energía eléctrica»*

En segundo lugar, en razón a que la convención suscrita por Electroguajira y Sintraelecol, fue celebrada con posterioridad a la sustitución normativa de la ley 4 de 1976 por la ley 71 de 1988, dado que data de 1993-1995 y la celebrada por Electrocaribe y el sindicato de trabajadores de la entidad, si bien corresponde al texto de la convención 1983-1985, fue ratificada por el artículo 106 parágrafo 3º de la compilación de normas convencionales de la convención colectiva 1998 -1999, adoptada en plena vigencia del artículo 14 de la ley 100 de 1993 y por lo tanto, para la fecha en que se realizó la negociación, en ambos casos, la ley 4 de 1976 estaba derogada y al tratarse de una norma excluida del ordenamiento jurídico, el único sentido posible de interpretación es que las partes tenían la voluntad de continuar aplicándola como norma convencional y así lo ha entendido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en forma reiterada, como se señaló. No ocurre lo mismo en el sublite, donde, se reitera, la convención se celebró cuando apenas iniciaba la aplicación de la Ley 4 de 1976 y no fue ratificada en norma posterior, lo que lleva a la Sala a concluir que las partes no decidieron la aplicación de la ley sin consideración a su vigencia y por tanto existe una disanalogía fáctica, argumento legítimo que impide aplicar el precedente



De otra parte, en relación con el principio de favorabilidad en la interpretación de la cláusula convencional, que vincula a los funcionarios judiciales, conforme lo ha definido la Sala Plena de la Corte Constitucional en las sentencias SU 241 de 2014, SU 267 Y SU 445 de 2019, se encuentra, que no existen dos interpretaciones válidas, pues, a juicio de esta Sala, la interpretación del extremo activo del litigio, en torno a la incorporación de la ley 4 de 1976, como norma convencional sin consideración a su vigencia, no es plausible porque va en contra del sentido literal de la norma convencional y el contexto histórico en que se adopta y llevaría a imponer a la demandada, obligaciones a las cuales no se vinculó bajo el ejercicio autorizado del derecho a la negociación colectiva, en un escenario constitucional que hoy propugna por la uniformidad en las reglas pensionales.

Respecto al principio de favorabilidad en la interpretación de cláusulas convencionales la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL 2101 del 01 de julio de 2020, precisó lo siguiente:

*“Para finalizar, es claro para esta Sala que tampoco resulta aplicable el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 53 de la Constitución Política, pues dicho precepto parte de la existencia de una duda en la aplicación o interpretación de una norma y no opera frente a la valoración probatoria que realizan los jueces.*

*De entenderse que la convención colectiva de trabajo es fuente formal del derecho, este postulado o el del in dubio pro operario se aplicarían bajo el supuesto de existir dos o más interpretaciones sólidas contrapuestas. Significa esto que no es cualquier choque interpretativo el que da lugar a su aplicación, sino aquel originado a partir de dos o más interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas (sentencia CSJ SL2426-2018).*

*Así se señaló en sentencia CSJ SL18110-2016:*

*Por último, es de anotar que el sentido atribuido por el Tribunal a esas disposiciones convencionales no desconoce el principio favorabilidad en la interpretación de las fuentes formales del derecho —artículo 53 Constitución Política—, ya que este postulado parte del supuesto de la existencia de dos o más interpretaciones sólidas contrapuestas. Significa esto que no es cualquier colisión interpretativa la que da lugar a aplicar la favorabilidad, sino aquella originada a partir de dos o más interpretaciones firmes y bien fundamentadas o estructuradas.”*

En otro orden de ideas, respecto a la aplicación del acto legislativo 01 de 2005, debe precisar la Sala, que los derechos invocados tienen como fecha de causación el 01 de enero de 2000, con anterioridad a la vigencia del acto legislativo citado, por lo tanto, en una nueva revisión del tema, debe considerarse, que de haberse incorporado el reajuste pretendido en la norma convencional, estaríamos frente a un derecho adquirido, que se consolidó mientras la regla pensional convencional tuvo vigencia, por lo que no se vería afectado por la modificación constitucional, por lo tanto no es esa la razón que impide el reconocimiento del pluricitado incremento.

En este contexto jurídico, se observa acertada la decisión de primera instancia y por ello debe ser confirmada.

### **3. DECISION**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- SE **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación, proferida por el Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, el 05 de marzo de 2020, en el proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JOSE HELGAR LOPEZ GUZMAN en contra de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

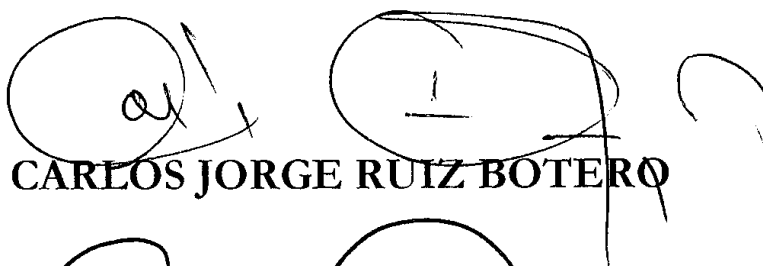
2.- Sin **COSTAS** en la presente instancia.

3.- Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen

El fallo anterior queda notificados a las partes por ESTADOS, de conformidad con el artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,

  
**SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE**

  
**CARLOS JORGE RUIZ BOTERO**

  
**VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**

La presente providencia fue notificada por estado No. **45** fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 15 de marzo de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS

Secretario